

**DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN LAS ISLAS BALEARES (pp. 2-  
23)**

—

**DRET I POLÍTQUES AMBIENTALS A LES ILLES BALEARS (pp. 24-44)**

JOSÉ MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ

*Departament de Territori. Consell Insular de Mallorca*

—

*Consultor*

*Universitat Oberta de Catalunya*

**Sumario:** 1. Introducción. 2. Actividad legislativa. 2.1. Se aprueba la Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura. 2.2. Proyecto de Ley reguladora de la ordenación y uso del suelo. 2.3. Nuevo plan hidrológico. 2.4. Anteproyecto de la futura Ley de Transportes y Movilidad. 3. Política sobre patrimonio ambiental. 3.1. Proyecto de conservación y mejora del Parque Natural de s'Albufera des Grau. 3.2. Ampliación de zonas marinas protegidas. 3.3. Geoparque en Menorca. 3.4. Declaración de nuevos lugares de importancia comunitaria (LIC). 3.5. Acciones de recuperación de fauna autóctona. 4. Política ante el cambio climático. 4.1. Energías renovables en Menorca. 4.2. Reforestación y cambio climático. 5. Cooperación pública y privada: recuperación ambiental de áreas quemadas.

## **1. Introducción**

La experiencia nos muestra que en tiempos de crisis económica, y con las restricciones presupuestarias consecuentes, la actividad administrativa se dirige fundamentalmente a introducir modificaciones normativas que se adapten a los nuevos escenarios resultantes. También parece que, con el menor margen de maniobra económico, los proyectos normativos no son ahora encomendados a equipos de expertos externos, personas que dejaban una huella fácil de reconocer en la propuesta que formulaban. Estamos experimentando así una hornada legislativa que no cuenta con una paternidad clara y que es el resultado de la intervención de muchas personas sin una dirección firme (o, incluso, con una excesiva dirección política en detrimento del rigor técnico); eso, por otro lado, está pasando en el ámbito de diferentes gobiernos con independencia de su signo político.

Señalo esto porque, como mínimo en el caso de las Islas Baleares, la legislatura es extensa en novedades normativas. Algunos sectores se están legislando por primera vez desde el Parlamento autonómico y plantean novedades importantes en el panorama normativo del archipiélago. El problema, sin embargo, radica ahora en que algunos de los textos normativos planteados no provienen de propuestas formuladas por personas con una dilatada experiencia en técnica legislativa; más bien todo lo contrario, parece que se están elaborando desde servicios internos sin una clara conciencia de las dificultades de legislar sobre una materia que no se encuentra aislada del mundo jurídico, sino que pertenece a un sistema donde preexisten numerosas previsiones. La elaboración de normas, en especial las que tienen rango de ley, no es una tarea en absoluto sencilla.

Este fenómeno descrito supone que algunos objetivos perseguidos no encajen con determinados conceptos tradicionales consolidados por las leyes y la jurisprudencia, o con otros textos en vigor. Además, se formulan propuestas que se sitúan en el ámbito de las dispensas singulares, las famosas amnistías o regularizaciones voluntarias, que

generan agravios comparativos con las personas que nunca han realizado acciones contra la normativa y no han consolidado, por la vía de hecho, situaciones que pueden ubicarse en el terreno de los derechos adquiridos.

También se está experimentando una devaluación de la calidad de las normas dictadas; las múltiples manos que están interviniendo en los procesos de conformación de estas leyes tienen como efecto que la estructura final se vea afectada, que el lenguaje utilizado no sea bastante preciso e inequívoco y que el orden de las previsiones no siga pautas claras. La técnica legislativa que iluminó anteriormente normas de indiscutible calidad está quedando marginada por una intencionalidad efímera, por el corto plazo y por las circunstancias cambiantes.

Sirva esta introducción para justificar algunas de las valoraciones realizadas en las crónicas anteriores, así como también algunas de las que se realicen en este número de la revista. Pasamos ahora a examinar con más amplitud los temas que hemos seleccionado este semestre.

## **2. Actividad legislativa**

### *2.1. Se aprueba la Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura*

Una de las novedades legislativas relacionadas con la extracción y el aprovechamiento de recursos naturales es la nueva ley de pesca marítima: la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura en las Illes Balears<sup>1</sup>. Esta disposición fue aprobada por el Pleno del Parlamento el pasado martes día 22 de octubre de 2013, tras superar el texto el dictamen de la Comisión de Economía, con los votos a favor de los parlamentarios del Grupo Popular; en algunos pocos apartados, el texto también contó con el voto de los grupos de la oposición y de los diputados no adscritos. Sin embargo, las enmiendas que no fueron aceptadas en su día ante la Comisión también fueron rechazadas en el Pleno.

El proyecto de ley fue impulsado por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio con el objetivo de regular, por primera vez en la historia del archipiélago, una actividad olvidada por la legislación balear. Con la Ley 6/2013 se rompe con la dinámica de un régimen disperso que se encontraba cubierto por una normativa

---

<sup>1</sup> Acceso en <http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=845276&lang=ca>.

reglamentaria fragmentada y a veces escasa. Esta ley de pesca nace con la voluntad expresada por el legislador de disponer por primera vez de un marco normativo propio que regule la actividad pesquera en todos los ámbitos. En el debate parlamentario se proclamó en diferentes ocasiones el hecho de que esta norma se haya impulsado buscando el consenso con el sector afectado.

Desde el punto de vista formal, la Ley ahora aprobada se estructura en doce títulos, ciento cuarenta y seis artículos, y cuatro disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y tres finales.

Según podemos leer en la exposición de motivos, la Ley 6/2013 ha de permitir adecuar la normativa europea a las particularidades de nuestra comunidad autónoma con medidas modernas de conservación y de gestión de los recursos marinos vivos; entre estas medidas, se introducen figuras como los planes de gestión plurianuales, los planes de recuperación para especies concretas, los planes experimentales, los censos de barcos o las cuotas de pesca, entre otras. Esta es una de las dimensiones ambientales que más podrían destacar de la nueva normativa.

Igualmente, también sería importante destacar el hecho de que la Ley (al menos sobre el papel) quiere reforzar la figura de la reserva marina, herramienta fundamental de la política pesquera balear, con la creación de la Red Balear de Áreas Marinas Protegidas, que velará por la coordinación y la creación de sinergias entre los agentes implicados. Así, la nueva norma establece que integran la Red Balear de Áreas Marinas Protegidas:

1. Como mínimo, las reservas marinas siguientes:

- Del Norte de Menorca.
- De los Freus de Ibiza y Formentera.
- De la Bahía de Palma.
- De Migjorn de Mallorca.
- De las Islas Malgrats.
- De la Isla del Toro.
- Del Levante de Mallorca.

2. Como mínimo, los ámbitos marinos de los espacios naturales protegidos siguientes:

- Parque Nacional Marítimo-terrestre de Cabrera.

- Las reservas naturales des Vedrà, es Vedranell y los islotes de Ponent.
- El parque natural de s'Albufera des Grau.
- El parque natural de ses Salinas de Ibiza y Formentera.

Una de las vertientes que hay que destacar desde el punto de vista ambiental es que la nueva ley permitirá regular la pesca marítima recreativa, una actividad para la cual hay más de 50.000 licencias en vigor en nuestra comunidad y que tiene una clara incidencia sobre el recurso. Como contrapunto, aparece en la norma la regulación de una actividad complementaria que, si nos atenemos a la experiencia alcanzada con los agroturismos, puede llegar a ser principal. Nos referimos a la previsión de que los pescadores podrán complementar la extracción con otras actividades económicas relacionadas, en particular con el turismo pesquero, una reivindicación histórica del sector que desconocemos hacia donde puede derivar en un futuro.

Lo que también puede destacarse es el detallado régimen sancionador que introduce la Ley. Este régimen se establece tanto para la pesca profesional como para la recreativa en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, adaptado a la realidad social y pesquera de las Islas Baleares.

## *2.2. Proyecto de Ley reguladora de la ordenación y uso del suelo*

Más controvertido y polémico será, con toda probabilidad, el Proyecto de Ley reguladora de la ordenación y uso del suelo (LOUS)<sup>2</sup>, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de fecha 13 de septiembre de 2013 y que es enviado al Parlamento de las Islas Baleares para su tramitación.

Este proyecto de ley se aprueba después de impulsarse una batería de decretos-ley y de leyes en materia de ordenación territorial, urbanística y turística con clara incidencia en la intervención administrativa sobre el territorio. Precisamente, en junio el Gobierno dio de plazo a los ayuntamientos hasta el año 2016 para regularizar los servicios de alcantarillado de zonas residenciales que no disponían de ellos, una de las asignaturas pendientes en muchos lugares del archipiélago. Así pues, el Gobierno aprobó un decreto-ley de regulación provisional de las nuevas construcciones en núcleos residenciales sin red de saneamiento con el objetivo de posibilitar, durante un período

---

<sup>2</sup> Acceso en: <<http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=1605811>>.

de tres años, la construcción de viviendas sin saneamiento en los núcleos, siempre y cuando se trate de edificios unifamiliares, aislados o entre medianeras y se garantice un tratamiento correcto de las aguas residuales. Como novedad, este decreto-ley fija la obligación del promotor de garantizar el coste de las obras necesarias para la futura conexión del edificio a la red cuando esta esté en funcionamiento.

Este decreto-ley deroga el artículo 3 de la reciente Ley 10/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de ordenación territorial, urbanismo y de impulso a la inversión; en esta disposición se fijó una normativa transitoria que exceptuaba en determinados supuestos de suelo urbano y urbanizable la necesidad de implantación del servicio de alcantarillado para el otorgamiento de licencias, certificados de finales de obra y cédulas de habitabilidad para viviendas unifamiliares aisladas. Al mismo tiempo, el artículo mencionado exigía que en el plazo de un año, contado desde la entrada en vigor de la Ley, los ayuntamientos tenían que haber aprobado definitivamente el pertinente proyecto de urbanización o dotación de servicios que implantara el sistema de alcantarillado; en este proyecto debían incluirse las conexiones a los sistemas generales de depuración, y, asimismo, las obras mencionadas tenían que ejecutarse y estar en funcionamiento antes de dos años desde la entrada en vigor de la Ley.

El problema es que el primer plazo de un año finalizó el día 5 de agosto de 2011, y el Gobierno ya aprobó, en julio de 2011, prorrogar dos años, hasta agosto de 2013, los plazos recogidos en la mencionada Ley. La situación, hoy por hoy, es que la mayoría de los ayuntamientos afectados de las Islas Baleares no habían aprobado definitivamente los proyectos de urbanización o dotación de servicios de alcantarillado aludidos, lo que imposibilitaba, a partir de agosto, la construcción de nuevas viviendas unifamiliares. Si esto se hubiera producido, se habría agravado la difícil situación económica tanto del sector público como del privado. Por eso, es necesario mantener esta regulación provisional hasta la implantación efectiva del saneamiento en todos los núcleos urbanos, sin perjuicio de las excepciones que legalmente se puedan prever; como no puede ser de otra manera, con esta moratoria la protección ambiental queda marginada en favor del interés económico. Este desfase provocó que se tuviera que aprobar el Decreto-Ley 4/2013, de 21 de junio, de regulación provisional de las nuevas edificaciones en núcleos residenciales sin red de saneamiento. Con la aprobación de este decreto-ley se da un nuevo margen a los ayuntamientos hasta 2016 para regularizar los servicios de

alcantarillado de zonas residenciales, de forma que se permite, en determinados supuestos, exceptuar la obligación de implantar el servicio de saneamiento para otorgar licencias, certificados de final de obra y cédulas de habitabilidad para viviendas unifamiliares, previendo un control previo de la Administración competente en materia hídrica. Evidentemente, es necesario hacerlo así para evitar vulnerar la normativa europea sobre la materia —la Directiva Marco del Agua y otras disposiciones en materia de tratamiento de aguas residuales—, aunque no se soluciona correctamente la problemática que se genera en las llamadas zonas sensibles.

Si hago notar estas circunstancias, es para ilustrar la tendencia que marcará la nueva LOUS. El anteproyecto ya fue examinado en números anteriores de la RCDA, por lo que no me extenderé ahora, pero podemos analizar lo que prevé el Proyecto de Ley en relación con el Decreto-Ley 4/2013, de 21 de junio, sobre saneamiento:

Disposición adicional octava.

Exención de la implantación de la red de saneamiento

1. Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley para los asentamientos en el medio rural, excepcionalmente el planeamiento urbanístico general podrá prever ámbitos de suelo urbano en donde no resulte exigible la existencia de red de saneamiento, siempre que se cumplan algunos de los requisitos siguientes:

- a) Que la ejecución de la red de saneamiento suponga, por las características geomorfológicas de la zona o por la baja intensidad del núcleo, un coste manifiestamente elevado.
- b) Que su implantación no suponga ninguna ventaja para el medio ambiente.

En estos casos, el planeamiento tendrá que prever la instalación de sistemas de depuración de aguas residuales como depuradoras de agua o fosas sépticas estancas y homologadas.

La conclusión que podemos extraer es que los sucesivos decretos-ley y las leyes ya aprobadas son prórrogas que pueden culminar con el acogimiento que propicia esta disposición, es decir, con la exoneración generalizada, en determinados casos, de la obligación de conectarse a una red de saneamiento. En muchas ocasiones esto implicará que el incumplimiento beneficie, por el ahorro consiguiente, a residentes y ayuntamientos que no quisieron o pudieron implantar una red como establecía la

normativa de aplicación. La disposición transitoria cuarta completa la solución pretendida con este régimen (reproducción de la aprobada con el Decreto-Ley 4/2013).

#### Disposición transitoria cuarta

##### Implementación de la red de saneamiento

En los suelos urbanos de uso predominantemente residencial existentes en la fecha que esta Ley entre en vigor y que no dispongan de red de saneamiento y para los que no resulte procedente la categoría de asentamiento en el medio rural ni la aplicación de lo previsto en la disposición adicional octava, se pueden otorgar licencias de edificación de nueva planta para uso residencial, así como los correspondientes finales de obra y cédulas de habitabilidad de acuerdo a la normativa aplicable, siempre que concurren los siguientes requisitos:

- a) Que no sean edificios plurifamiliares.
- b) Que dispongan de un sistema de recogida de aguas residuales homologado que garantice un tratamiento adecuado.
- c) Que los promotores garanticen, de cualquier forma admitida en derecho, la ejecución de las obras para la conexión a la red de saneamiento, una vez que ésta esté efectivamente implantada y en funcionamiento.
- d) Que la licencia se otorgue dentro de los tres años a contar desde la entrada en vigor del Decreto ley 4/2013, de 21 de junio, de regulación provisional de las nuevas edificaciones en núcleos residenciales sin red de saneamiento.

El cumplimiento del requisito previsto en la letra b debe acreditarse con un informe de la Administración competente en recursos hídricos, que tiene el carácter de determinante, el cual debe emitirse en el plazo de dos meses desde que se solicite y antes de que se otorgue la licencia.

Igualmente, considero importante hacer una mención específica a la previsión que más controversia ha generado: la llamada amnistía urbanística en suelo rústico, que va en la misma línea que la disposición apuntada anteriormente. La disposición es larga, pero creo importante transcribirla íntegramente para así poder hacer una valoración inicial:

#### Disposición transitoria décima

Procedimiento extraordinario de incorporación a la ordenación de edificaciones existentes en suelo rústico.



1. Las edificaciones existentes en suelo rústico, respecto de las cuales a la entrada en vigor de esta ley ya no procediera adoptar las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, por manifiesta prescripción de la infracción según la normativa de aplicación, se podrán incorporar a la ordenación en el plazo máximo de tres años, con todos los derechos y deberes inherentes a las obras realizadas con licencia.

Para la aplicación de lo anterior en terrenos incluidos en el ámbito de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares se entenderá que ha prescrito la infracción si se acredita la existencia de la edificación con anterioridad al día 10 de marzo de 1991, siempre que no se haya efectuado en la misma, con posterioridad, un cambio de uso.

A estos efectos, el procedimiento se sustanciará por la persona interesada, ante el ayuntamiento correspondiente, donde se solicitará la legalización junto con la documentación gráfica y escrita relativa a la edificación en su estado real y proyecto de incorporación de medidas de adecuación a las condiciones generales de integración ambiental y paisajística que la ordenación establezca. El artículo 25.2 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Illes Balears no resultará aplicable a los efectos de este procedimiento.

2. La anterior incorporación no resultará de aplicación a las edificaciones que, de acuerdo con el planeamiento vigente, queden sujetas a expropiación, cesión obligatoria y gratuita o derribo o cuando en las edificaciones se desarrollen actividades sujetas a la previa declaración de interés general.

Asimismo, no resultará de aplicación a aquellas edificaciones existentes situadas en dominio público y en las servidumbres derivadas de la legislación de costas.

3. La legalización estará sujeta al pago de las mismas tasas y de los mismos impuestos previstos en la normativa para las nuevas edificaciones. Así mismo, la persona interesada deberá abonar al ayuntamiento una prestación económica. Las cantidades ingresadas por este concepto deben destinarse a la adquisición, recuperación, protección y gestión sostenible de espacios y recursos naturales o su incorporación al patrimonio municipal de suelo.

La prestación económica a que se refiere el párrafo anterior se fijará por aplicación de los siguientes porcentajes al coste de ejecución material de la edificación legalizada que se fije en el expediente de legalización:

a) El 15%, si la legalización se realiza en el primer año de la vigencia de este procedimiento.

b) El 20%, si se realiza en el segundo año.

c) El 25%, si se realiza en el tercer año.

4. Esta disposición entrará en vigor una vez que, en el ámbito insular respectivo, haya sido adoptado acuerdo plenario del consejo insular por mayoría absoluta. Este acuerdo plenario se publicará en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y el plazo de tres años a que se refiere el apartado primero de la presente disposición comenzará a contarse a partir de dicha publicación.

Efectivamente, las edificaciones en suelo rústico ilegales que no hayan sido sancionadas por la infracción cometida y esta haya prescrito podrán disfrutar de la condición de edificación legalizada. Si se tiene presente que el 90 por ciento de las edificaciones ilegales en las Islas no han sido nunca objeto de un expediente de disciplina urbanística, constataremos que estamos ante una dispensa singular (o una legalización encubierta) que defrauda los principios de igualdad y de seguridad jurídica, así como el de confianza legítima, en perjuicio del ciudadano cumplidor de la ley.

Muchos observadores han apuntado la posible inconstitucionalidad de esta previsión, y, además, se espera que se plantee más de un conflicto ante los tribunales. El resultado es que, pagando una determinada suma de dinero, el infractor puede resarcir el daño cometido con la infracción sin que haya que restituir ni la realidad jurídica infringida ni la realidad física alterada. Con todo, el mecanismo es confuso y está supeditado a una serie de condiciones complejas, en especial la explicitada en el apartado cuarto.

Habrá que esperar ahora a la evolución del proyecto en sede parlamentaria, y es presumible que en una próxima crónica podamos comentar ya el texto definitivo de la Ley.

### *2.3. Nuevo plan hidrológico*

En crónicas anteriores explicamos las vicisitudes del Plan Hidrológico de las Islas Baleares, el cual, una vez aprobado por el Gobierno, enviado a Madrid e informado favorablemente por la Mesa Nacional del Agua, fue retirado en 2011 por el nuevo Gobierno entrante. Con el retorno del Plan elaborado en su día, este fue desmontado, con las carencias y los vacíos consiguientes. El Plan, sin embargo, se fue corrigiendo y

revisando, hasta llegar a un texto que el 15 de julio se sometió a aprobación del Consejo Balear del Agua. Cabe recordar que este nuevo documento está llamado a sustituir el actual Plan, vigente desde 2001.

El Plan Hidrológico de las Islas Baleares (PHIB) es el documento que tiene que regir la preservación y el aprovechamiento del dominio público hidráulico de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en los próximos años. La propuesta sometida a aprobación fue ratificada por amplia mayoría, dado que constan en acta 33 votos a favor y uno en contra. Cabe señalar que el Consejo Balear del Agua está presidido por el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, y está constituido por representantes de las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Hacienda y Presupuestos, Economía y Competitividad y Salud, de todos los consejos insulares, de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB), de ayuntamientos, de organizaciones agrarias, pesqueras y ganaderas, de asociaciones de consumidores, de entidades ecologistas, así como de otros colectivos profesionales vinculados con la gestión del agua y las infraestructuras hídricas de nuestra comunidad autónoma como el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas o la Asociación de Empresas de Sondeos. La unanimidad no deja de ser sorprendente en un documento de estas características.

Con posterioridad, el Gobierno ratificó el 19 de julio de 2013 el texto del nuevo Plan Hidrológico de las Islas Baleares (PHIB). Unas semanas después, el Consejo Nacional del Agua, en fecha 6 de agosto de 2013, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), informó favorablemente del nuevo Plan Hidrológico. El resultado de la votación fue: 77 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Este órgano asesor del Gobierno central cuenta con representación de la Administración general del Estado, de las comunidades autónomas, de los agentes locales, de los organismos de cuenca, de las organizaciones profesionales y económicas relacionadas con los diferentes usos del agua, de las organizaciones sindicales y empresariales y de las entidades sin ánimo de lucro estatales.

Una vez ratificado por el Consejo Nacional del Agua, el Plan Hidrológico de las Islas Baleares fue enviado al Ministerio para la redacción de la propuesta correspondiente de aprobación. Así, finalmente, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), aprobó el día 6 de septiembre de 2013 el Real Decreto 684/2013, por el cual se aprueba el Plan

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Islas Baleares<sup>3</sup>. El Real Decreto fue publicado en el BOE número 215, de 7 de septiembre de 2013 (páginas 65.340 a 65.342), por lo cual ha entrado en vigor, aunque no se ha publicado todavía la normativa del Plan en el *Boletín Oficial de las Islas Baleares*.

Como veremos, el PHIB regirá, en principio, la preservación y el aprovechamiento del dominio público hidráulico de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares durante los próximos años. Tal como se hace constar en la motivación del Plan, los principales objetivos que contiene son: garantizar el buen estado ecológico del dominio público hidráulico; satisfacer la demanda de agua, protegiendo su calidad; equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial; y fomentar un uso racional de este recurso preciado y bien escaso en el contexto insular de cuencas aisladas y limitadas.

La adaptación a la Directiva Marco del Agua conlleva que el nuevo PHIB introduzca la figura de masa de agua en sustitución del concepto de unidad hidrogeológica utilizado hasta ahora para clasificar los recursos disponibles, y clasifica estas masas en cuatro categorías en función de su estado ecológico. En concreto, se clasifican 90 masas de agua en las Islas Baleares, el 70% de las cuales se encuentran en buen estado. Los principales objetivos del nuevo plan son garantizar el buen estado ecológico del dominio público hidráulico, satisfacer la demanda de agua, protegiendo su calidad, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y fomentar un uso racional de este recurso. La memoria del Plan destaca el hecho de que “se trata de un plan realista y más conservador que el documento vigente hasta ahora, que busca el equilibrio entre la protección del recurso y la satisfacción de la demanda”; lo que falta por comprobar es si con este nuevo plan se protegerá mejor el recurso.

Entre los aspectos más destacados del nuevo PHIB, hay que señalar también una serie de medidas encaminadas a garantizar el estado ecológico del agua, como la reducción de la extracción de agua de pozo permitida para consumo doméstico, que pasa de 500 a 400 m<sup>3</sup>/año, o la prohibición de hacer extracciones en los primeros 200 metros de la costa para evitar la salinización de los acuíferos. También se otorga la máxima protección posible que recoge la Ley de Aguas a las 4.215,15 hectáreas calificadas actualmente como zonas húmedas de las Islas Baleares, y se recoge la posibilidad de

---

<sup>3</sup> Acceso en <<http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/07/pdfs/BOE-A-2013-9429.pdf>>.

recuperar futuras zonas, así como la de recuperar zonas húmedas degradadas e integrarlas dentro de un proyecto urbano.

Además, el PHIB mantiene los perímetros de protección de los pozos de suministro urbano, así como la distancia mínima entre captaciones, que es de 100 metros, tal como indica la Ley de Aguas. También fomenta la utilización de recursos alternativos (agua regenerada y desalinizada) para determinados usos con el objetivo de favorecer la recuperación y la mejora de los recursos naturales.

El PHIB también recoge medidas encaminadas al uso racional y al ahorro de agua, con un objetivo de reducción de pérdidas en red del 20% antes del año 2021, impulsando que las nuevas edificaciones incluyan grifos de ahorro de agua.

El proceso de redacción del Plan Hidrológico ahora aprobado, que sustituye al retirado en su día, empezó en noviembre del año 2011 en el marco de un proceso participativo que, según afirma el Gobierno, ha buscado el máximo consenso posible con todos los agentes implicados. A lo largo de los últimos meses el documento se ha sometido a dos plazos de exposición pública y a la evaluación ambiental por parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente, por el trámite de urgencia.

#### *2.4. Anteproyecto de la futura Ley de Transportes y Movilidad*

Otro proyecto que avanza en la tramitación, una vez elaborado el texto inicial, es el relativo a la futura Ley de Transportes y Movilidad. Precisamente en fecha reciente, el día 14 de noviembre de 2013, el Consejo Balear de Transportes Terrestres de las Islas Baleares informó favorablemente el Anteproyecto de Ley. Este órgano colegiado está constituido por todos los agentes implicados en el sector del transporte en las Islas Baleares; son miembros de este diferentes representantes de la Dirección General de Transportes del Gobierno de las Islas Baleares, los consejos insulares, la Cámara de Comercio, el Consorcio de Transportes de Mallorca, las asociaciones de consumidores y usuarios, los sindicatos más representativos, la Federación de Entidades Locales (FELIB), el Ayuntamiento de Palma y las federaciones o asociaciones de ámbito autonómico más representativas de los sectores del transporte terrestre de mercancías, regular de viajeros y discrecional de viajeros en autobús, del transporte público de viajeros en automóviles de turismo y sanitario de carretera, de operadores de transporte terrestre, de las agencias de viajes y del alquiler de vehículos, así como de las empresas

de transporte ferroviario, la Confederación de PYME-Baleares (PIMEB) o la gran patronal CAEB.

Durante el proceso de elaboración del borrador de la Ley se ha procedido a abrir los debates correspondientes, además de someterlo a dos fases de exposición pública, para que el sector pudiera opinar y hacer sus aportaciones. Según el calendario que tiene previsto el Gobierno, la intención es someter el texto a aprobación del Consejo de Gobierno, con la finalidad de tramitarlo ante el Parlamento antes de acabar el año 2013.

La memoria que acompaña al texto del anteproyecto destaca la importancia de contar en un futuro próximo con la primera ley de transportes de las Islas Baleares; asimismo, señala que hace dos años que se trabaja en el documento y que se ha buscado en todo caso el máximo consenso. Por otro lado, se especifican los objetivos de combatir decididamente la oferta ilegal, que perjudica el sector, de flexibilizar determinadas fórmulas y trámites administrativos, y de facilitar nuevos modelos (se habla de la autorización de taxis de más cinco plazas como una de las novedades que recogerá la norma), entre muchas otras novedades que analizaremos en un próximo número de la RCDA, una vez que se haya aprobado el texto definitivo.

### **3. Política sobre patrimonio ambiental**

#### *3.1. Proyecto de conservación y mejora del Parque Natural de s'Albufera des Grau*

En muchas ocasiones hemos comentado los aspectos positivos de la cooperación entre los instrumentos de intervención administrativa y la iniciativa privada, con la finalidad de contribuir a la conservación del patrimonio natural. Uno de los instrumentos que más hemos tratado es el de la llamada custodia del territorio<sup>4</sup>. La custodia del territorio (*Land Stewardship*) es un fenómeno social de conservación privada del patrimonio natural y cultural surgido en el siglo XIX en los Estados Unidos de América cuya proyección en el mundo anglosajón ha sido enorme. La necesidad de ampliar cuantitativa y cualitativamente el horizonte de conservación del patrimonio natural en nuestro país requiere abordar seriamente la implicación activa de la sociedad y de la

---

<sup>4</sup> GÓMEZ GONZÁLEZ, J. M., “La Custodia del Territorio como instrumento de implicación social en la conservación del patrimonio natural”, *Revista Ecosostenible*, núm. 16, junio de 2006. WOLTERS KLUWER y GÓMEZ GONZÁLEZ, J. M., *Revista Catalana de Dret Ambiental*, vol. II, núm. 2 (2011): 1-29, <<http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/viewFile/220/786>>.

propiedad privada en este objetivo, que tradicionalmente se ha configurado como una mera función pública ambiental.

Como variante del concepto estricto de custodia privada podemos encontrar figuras de cooperación entre el sector privado y el sector público para completar los objetivos de esta función pública de conservación a la que nos referimos. Con todo, la legislación española en materia de patrocinio o mecenazgo no aporta un escenario atractivo para la cooperación entre ambos sectores. Más adelante hablaré de una iniciativa singular a raíz del incendio que quemó 2.335 de hectáreas en la sierra de Tramuntana de Mallorca, pero ahora interesa destacar un apartado que afortunadamente se repite año tras año y en muchos otros lugares sometidos a protección.

En el caso que ahora nos ocupa, el Gobierno de las Islas Baleares y la Obra Social "la Caja" presentaron este noviembre el proyecto de conservación y mejora del Parque Natural de s'Albufera des Grau (Menorca), que implica la realización de una serie de trabajos de mejora y conservación en el mencionado parque, ejecutados por una brigada de personas en riesgo de exclusión sociolaboral. Estos trabajos forman parte del proyecto de conservación de este espacio natural protegido, que han impulsado conjuntamente el Gobierno de las Islas Baleares y la Obra Social de la entidad mencionada con el objetivo de mejorar algunos lugares de uso público del Parque y favorecer a la vez la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión. El proyecto implica una aportación de 31.400 euros de la entidad financiera, un ejemplo de cooperación o de mecenazgo privado con finalidades ambientales.

Tales labores se concretan en la realización de diferentes actuaciones en el Parque durante tres meses, desde mediados de septiembre hasta mediados de diciembre de 2013. De estos trabajos se ocupa una brigada de cuatro trabajadores y un capataz de la Fundación Nous Vents.

De acuerdo con lo que se informó respecto al proyecto, en primer lugar los trabajadores realizan tareas de limpieza y retirada de la vegetación excedente de las riberas de los tres itinerarios de uso público del Parque, que son el de sa Gola, el de Santa Madrona y el del Mirador de cala Llimpa, que representan una extensión total de 6,2 kilómetros; y, en segundo lugar y de manera simultánea, se retiran los residuos que el mar arrastra hasta el litoral de s'Albufera. Hasta hoy ya se ha actuado en cala Avellana y cala Torreta.

Finalmente, a partir de mediados de noviembre los trabajos de mejora del Parque se completarán con la retirada de la flora alóctona de los alrededores del faro de Favàritx, donde por primera vez se llevará a cabo una actuación de estas características. Concretamente, durante el último mes del proyecto las tareas de la brigada se centrarán en extraer y eliminar los ejemplares de especies invasoras como la pita o el aloe, que se encuentran en esta parte del Parque y que son una amenaza para la biodiversidad de la zona y para las especies vegetales autóctonas que habitan en ella.

La función social y los objetivos de conservación ambiental confluyen a menudo. Los espacios naturales ofrecen entornos y ambientes propicios para la implantación de programas de inserción laboral y el trabajo con colectivos en riesgo de exclusión. Esta cooperación pública y privada con finalidades ambientales se tendría que poder potenciar todavía más con la revisión del marco normativo de fundaciones y mecenazgo.

### *3.2. Ampliación de zonas marinas protegidas*

En la línea de lo que hemos apuntado en el apartado dedicado a la aprobación de la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura en las Illes Balears, se trabaja en la ampliación de zonas marinas, aunque este objetivo pretende buscar el equilibrio “económico, social y medioambiental”, con una clara ejemplificación del concepto de triple sostenibilidad que tanto gusta a los actuales gestores ambientales del archipiélago. Se quiere plantear una posible protección de nuevas áreas marinas en el mar balear, pero poniendo por delante la afectación sobre el sector pesquero insular que estas medidas podrían implicar.

Ha trascendido un documento en el cual se plantea la creación de tres nuevas áreas marinas protegidas en el sur de Mallorca (montañas Emile Baudot, Ausiàs March y Llevant de Cabrera). Este documento es en realidad un borrador de orden ministerial que ha elaborado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El documento incluye también la protección del canal de Menorca y una serie de medidas dirigidas a mitigar los efectos de la pesca de arrastre.

A raíz de la aprobación el 22 de octubre de 2013 de la primera Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura en las Illes Balears, la política del Gobierno se dirige a buscar el equilibrio entre los intereses del sector y la protección de los recursos pesqueros. Las



políticas que se derivan de todo ello tienen como objetivo que los pescadores representen un papel destacado “en la gestión sostenible de la pesca” y que se haga todo lo posible para conseguir acuerdos positivos para el sector.

### *3.3. Geoparque en Menorca*

Tal como se había expuesto en números anteriores de la RCDA, Menorca está impulsando la declaración de la isla como geoparque por parte de Unesco. Recientemente, esta candidatura ha recibido un nuevo impulso con el apoyo del Senado. Así, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado mostró por unanimidad un “total y decidido” apoyo a la candidatura que impulsa el Consell Insular de Menorca.

Un geoparque reconocido por la Unesco es un territorio que cuenta con un patrimonio geológico excepcional por su valor científico didáctico y estético. Según el programa de la institución internacional, un geoparque tiene que ser un territorio que disponga de una estructura de gestión sólida y que garantiza la participación ciudadana. La figura confluye con la de reserva de la biosfera, que ha cumplido los primeros veinte años en Menorca, y es que la figura del geoparque apuesta por una estrategia de desarrollo socioeconómico sostenible que incluye la promoción y la conservación de los valores naturales y culturales del territorio.

Así, con el desarrollo del proyecto de geoparque se pretende aprovechar el trabajo realizado en Menorca como reserva de la biosfera y estimular la economía local, no solo el turismo sostenible. El trabajo hecho en este sentido incorpora ahora el método de trabajo avalado por la Unesco y que la red europea supervisa dos veces al año en las reuniones del comité de coordinación. Como ya explicamos en su día, la propuesta de geoparque fue aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos del Consell Insular de Menorca en el Pleno de 18 de marzo de 2013.

### *3.4. Declaración de nuevos lugares de importancia comunitaria (LIC)*

El Consejo de Gobierno del día 16 de julio acordó ampliar la lista de lugares de importancia comunitaria (LIC) de las Islas Baleares con el espacio protegido por la red

Natura 2000 Puig Malet i Santa Eularieta (LIC ES5310126), con una superficie de 35,5 hectáreas en los términos municipales des Mercadal y de Alaior, en Menorca.

El objetivo de esta nueva zona LIC es proteger diferentes hábitats de interés comunitario como el acebuchal menorquín (*Olea y Ceratonia*), los encinares (*Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia*) y los matorrales termomediterráneos y preestépicos que se encuentran en este lugar del centro de la isla. Dentro del ámbito territorial de este LIC se encuentra la finca pública del Consell de Menorca Santa Eularieta, que forma parte de lo que se conoce como Plans d'Alaior o Plans de Turmadèn, en el municipio des Mercadal, en la cual se han reforestado 9,5 hectáreas de acebuchal autóctono. La geomorfología de esta zona se caracteriza por unas tierras mayoritariamente llanas formadas por materiales aluviales derivados principalmente de los sustratos silíceos que la rodean, donde también están presentes numerosas colinas de poca altura que funcionan como islas de ambientes más secos o dominados por sustratos rocosos y como refugios de biodiversidad en medio de unas tierras con una larga tradición de uso agropecuario.

La incorporación de este LIC es una medida compensatoria a la ampliación del vertedero des Milà II, en el término de Maó, que el Gobierno acordó el año 2007. En virtud de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), la ampliación del vertedero, ubicado dentro del LIC de s'Albufera en la Mola (SE 0000235), tenía que ser compensada con la recuperación y la protección de una superficie igual o superior a la que se destinaba a la ampliación del vertedero, de 8,9 hectáreas, que pudiera alojar los hábitats y las especies que se alterarían con aquel proyecto.

Con esta declaración, las Islas Baleares dispondrán de 138 lugares de importancia comunitaria, con una superficie de 221.119,5 hectáreas terrestres y marinas. Los LIC son áreas territoriales que contienen los hábitats y las especies representativos de la región biogeográfica que hay que proteger, preservar, recuperar y restaurar. La página <<http://www.xarxanatura.es>> recoge los LIC y las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) de las Islas Baleares. De estas últimas se han declarado 55 en el archipiélago balear, con una superficie de 138.591 hectáreas.

### 3.5. Acciones de recuperación de fauna autóctona

Baleares cuenta, mediante otro mecanismo de concierto entre la Administración pública y la iniciativa privada, con el Consorcio para la Recuperación de Fauna de las Islas Baleares (COFIB). El centro acoge fauna recogida del medio natural con la finalidad de recuperarla y proceder posteriormente a su liberación cuando su estado lo permita. El COFIB atiende una media de 2.500 animales cada año; el año pasado la cifra de animales recogidos por todas las Baleares fue de 2.797, entre animales silvestres (2.331) y exóticos (466). Las últimas acciones de liberación, en el marco del programa anual de actividades, se han puesto en práctica en el Parque Natural de Mondragó (Mallorca) con la soltada de unos treinta ejemplares de fauna autóctona recuperados en las últimas semanas en las instalaciones del COFIB.

El objetivo de estas actividades es sensibilizar sobre la importancia de la conservación de las especies autóctonas del Parque y liberar en su hábitat originario los ejemplares que, por diferentes razones, han sido recuperados en los últimos meses y han permanecido en el COFIB hasta que han alcanzado el peso y la medida adecuados para sobrevivir en libertad.

Según informan desde el Parque Natural de Mondragó, este espacio lleva a cabo desde el año 1994 un programa de seguimiento de la tortuga mediterránea que incluye actuaciones de conservación como la limpieza, el mantenimiento y la supervisión de diferentes abrevaderos distribuidos por el Parque o la liberación de ejemplares para incrementar la población. En los últimos diecinueve años se han liberado 737 ejemplares de esta especie endémica de la marina de Lluçmajor que habita predominantemente en zonas agrícolas con zarzales y garrigas xéricas.

Entre los hábitats de fauna que se encuentran en el Parque Natural de Mondragó, destacan los de las diferentes especies de aves que se concentran sobre todo en los estanques del tramo final de los torrentes de s'Amarador y ses Fonts de n'Alis, donde, además del cernícalo, habita el alcaraván común (*Burhinus oedicnemus*), la paloma torcaz (*Columba palumbus*), la tórtola (*Streptopelia turtur*), la abubilla (*Upupa epops*) y muchas otras de pequeño tamaño como el carbonero común (*Parus major*) o el busqueret (*Sylvia sp.*).

Entre los mamíferos del Parque Natural de Mondragó destacan el erizo, que habita en zonas de pinar, en garrigas y en zonas agrícolas, la comadreja, la jineta y la marta, y algunos roedores como el conejo, la liebre, el ratón de campo o el lirón careto.

Por toda la marina del Parque también se encuentran, además de la tortuga mediterránea, la culebra de cogulla occidental y el sapo verde. El Parque Natural de Mondragó consta de 766 hectáreas consideradas área natural de especial interés (ANEI) y forma parte de la red Natura 2000 como zona de especial protección para las aves (ZEPA) y lugar de interés comunitario (LIC).

Toda actividad de liberación de fauna recuperada persigue un doble objetivo; por una parte, la reinserción en el medio natural de ejemplares heridos recogidos por los técnicos y agentes de la autoridad en materia de medio ambiente; por otra, concienciar a la ciudadanía de la importancia de la conservación de estas especies para asegurar al buen estado de las poblaciones de ejemplares propios de los espacios naturales protegidos, que son, en esencia, representantes de los valores ambientales de estos lugares. Es evidente que con estas acciones se persigue también garantizar el equilibrio ecológico de los diferentes hábitats.

#### **4. Política ante el cambio climático**

##### *4.1. Energías renovables en Menorca*

En el marco de las políticas que pretenden reforzar la condición de Menorca como reserva de la biosfera, la Agencia Menorca Reserva de la Biosfera promueve una instalación fotovoltaica en la sede del Consell Insular en Maó. Lo que hay que destacar de la iniciativa es que promueve el autoconsumo ante la penalización que recientemente se ha impuesto sobre la generación de energía fotovoltaica conectada a la red.

Así, se ha publicado que el consejo de administración de la Agencia Menorca Reserva de la Biosfera aprobó en su última reunión instalar un conjunto de placas de generación de energía fotovoltaica y cuatro puntos de recarga de vehículos eléctricos en la sede del Consell Insular de Menorca. De las características distintivas de la instalación prevista se destaca que se trata de una planta fotovoltaica de 50 kW (58,86 kWp) que se ubicará sobre la cubierta de la sede del Consell Insular y se conectará a la red eléctrica interior en régimen de autoconsumo íntegro (evitando la inyección de excedentes en la red externa). Se prevé la habilitación de cuatro puntos destinados a la recarga de vehículos

eléctricos y un sistema de monitorización y seguimiento del funcionamiento de la instalación.

Esta iniciativa se enmarca en una política de impulso de la actividad económica relacionada con la protección del medio ambiente en la que la eficiencia y el ahorro energético, las energías renovables y la movilidad eléctrica son protagonistas especiales, tal como se puso de manifiesto en el Primer Congreso de Energías Renovables y Sostenibilidad en Territorios Insulares celebrado el pasado mes de abril, del que también dimos cuenta.

Con esta iniciativa el Consell Insular y la Agencia de Reserva de la Biosfera de Menorca quieren demostrar que es posible avanzar en la introducción de las energías renovables para cubrir parte de nuestras necesidades energéticas sin esperar a una legislación o normativa favorable. El modelo propuesto se basa en la incorporación de tecnologías maduras que hacen técnicamente viable la generación de energía eléctrica destinada al autoconsumo. La instalación anunciada quiere ser un ejemplo para otras administraciones, empresas o particulares.

#### *4.2. Reforestación y cambio climático*

Continuando con las políticas de cooperación entre la iniciativa privada y la Administración del Gobierno de las Islas Baleares, se ha impulsado un año más la campaña “Planta’m, actua contra el canvi climàtic”. La iniciativa consiste en el reparto de diferentes árboles y plantas autóctonos para ser plantados en el medio natural. Fundamentalmente las especies escogidas son pinos, encinas y acebuches.

La iniciativa consiste en la instalación de una carpa informativa en una quincena de ferias y mercados de Mallorca, Menorca e Ibiza donde se reparten árboles para plantar con el fin de dar a conocer las especies de árboles autóctonos de las Islas Baleares e informar a los visitantes de la importante función de los bosques en la lucha contra la desertificación y el cambio climático.

Esta iniciativa tiene un doble objetivo: por una parte, quiere sensibilizar a la ciudadanía, especialmente el público familiar; por otra, también busca contribuir a favorecer la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social. En este caso, personal de la organización Amadip-Esment ha participado en el diseño y la impresión de las bolsas de

las plantas y de las hojas informativas y un equipo de cuatro personas en riesgo de exclusión de la Red Incorpora se ha encargado de embolsar y repartir las plantas.

Este proyecto forma parte del Programa de Espacios Naturales y Reinserción Social de la Obra Social "la Caixa" y se lleva a cabo en el marco del convenio firmado entre esta entidad financiera y el Gobierno de las Islas Baleares para el año 2013. Para ejecutarlo, la entidad financiera ha destinado este año 40.000 euros.

### **5. Cooperación pública y privada: recuperación ambiental de áreas quemadas**

La isla de Mallorca vivió este año uno de los mayores incendios forestales de su historia reciente. La zona de ponente de la sierra de Tramuntana vio cómo se quemaban 2.335 hectáreas durante casi una semana (entre el 26 de julio y el 3 de agosto de 2013). A pesar del despliegue de medios, durante diversos días no se pudo hacer nada para detener el avance de las llamas, en una zona que ya se había quemado años atrás.

Como reacción para reducir los efectos del incendio y trabajar en la recuperación de la zona, se creó la comisión Tot(s) per sa Serra, formada por el Gobierno de las Islas Baleares, el Consell de Mallorca y los ayuntamientos afectados por el incendio forestal, iniciado el viernes 26 de julio en el municipio de Andratx, para canalizar y agrupar todas las actuaciones públicas o privadas que se pongan en marcha a partir de ahora para recuperar la zona quemada.

La intención manifestada por el Gobierno es la de coordinar todas las iniciativas que tengan por objetivo recuperar parte de la sierra de Tramuntana que se quemó con el incendio. En este sentido, se ha creado un espacio web (<http://totspersaserra.caib.es>) en el que se irán incorporando las acciones que se vayan llevando a cabo. La colaboración de particulares también se puede plasmar en acciones de voluntariado y aportaciones económicas a una cuenta bancaria.

La acción de la comisión corre paralela a un plan de actuaciones para la recuperación de la zona afectada. Este plan se centra en la retirada de los restos quemados para garantizar la seguridad de las personas y los bienes, y en las actuaciones para evitar desprendimientos y prevenir la erosión del suelo y la desertificación.

Por otro lado, la comisión Tot(s) per sa Serra creó cinco grupos de trabajo para coordinar las actuaciones de recuperación de la zona afectada por el incendio. El

objetivo de los grupos de trabajo es integrar todos los profesionales y colectivos que vayan a participar activamente en el proceso de recuperación de la superficie afectada. Los grupos de trabajo constituidos son los siguientes: caza; asociaciones; propietarios afectados; restauración; y voluntariado.

Asimismo, uno de los frentes que impulsa la comisión es el de desplegar las acciones de los voluntarios que participarán en las sucesivas jornadas de recuperación de la zona afectada por el incendio. Las tareas son básicas y no especializadas, aunque se trabaja en zonas de fuertes pendientes y elevado riesgo de erosión donde se han empezado a construir pequeñas presas y fajas vegetales que actuarán como infraestructuras de contención del suelo. Se trata de contener los procesos erosivos que pueden dificultar la futura recuperación vegetal de la zona. También se reconstruyen los márgenes de piedra seca y las paredes afectadas.

La comisión constituida supone un ejemplo de reacción rápida ante un acontecimiento grave que ha sensibilizado de manera significativa a la población de la isla de Mallorca. Aprovechar este tipo de hechos desgraciados para concienciar socialmente y promover acciones de cooperación públicas y privadas con la movilización ciudadana ha sido una maniobra ágil que hay que valorar positivamente. Un ejemplo de por dónde pueden ir algunas políticas ambientales que requieren una amplia complicidad.

**Sumari:** 1. Introducció. 2. Activitat legislativa. 2.1. S'aprova la Llei de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura. 2.2. Projecte de llei reguladora de l'ordenació i ús del sòl. 2.3. Nou pla hidrològic. 2.4. Avantprojecte de la futura Llei de Transports i Mobilitat. 3. Política sobre patrimoni ambiental. 3.1. Projecte de conservació i millora del Parc Natural de s'Albufera des Grau. 3.2. Ampliació de zones marines protegides. 3.3. Geoparc a Menorca. 3.4. Declaració de nous llocs d'importància comunitària (LIC). 3.5. Accions de recuperació de fauna autòctona. 4. Política davant el canvi climàtic. 4.1. Energies renovables a Menorca. 4.2. Reforestació i canvi climàtic. 5. Cooperació pública i privada: recuperació ambiental d'àrees cremades.

## 1. Introducció

L'experiència ens mostra que en temps de crisi econòmica, i amb les restriccions pressupostàries conseqüents, l'activitat administrativa s'adreça fonamentalment en introduir modificacions normatives que s'adaptin als nous escenaris resultants. També sembla que, amb el menor marge de maniobra econòmic, els projectes normatius no són ara encomanats a equips d'experts externs, unes persones que deixaven una empremta fàcil de reconèixer en la proposta que formulaven. Estem experimentant així una fornada legislativa que no compta amb una paternitat clara, i que són el resultat de la intervenció de moltes persones sense una direcció ferma (o fins i tot amb una excessiva direcció política en detriment del rigor tècnic); això, d'altra banda, està passant en l'àmbit de diferents governs amb independència del signe polític.

Apunto això perquè, com a mínim en el cas de les Illes Balears, la legislatura és extensa en novetats normatives. Alguns sectors s'estan legislant per primera vegada des del Parlament autonòmic i plantegen novetats importants en el panorama normatiu de l'arxipèlag. El problema, però, rau ara en què alguns dels textos normatius plantejats no provenen de propostes formulades per persones amb una dilatada experiència en tècnica legislativa, ans el contrari, sembla que s'estan elaborant des de serveis interns sense una clara consciència de les dificultats de legislar sobre una matèria que no es troba aïllada del món jurídic, sinó que pertany a un sistema on preexisteixen nombroses previsions; l'elaboració de normes, en especial les que tenen rang de llei, no és una tasca en absolut senzilla.

Aquest fenomen descrit fa que no encaixin alguns objectius perseguits amb determinats conceptes tradicionals consolidats per les lleis i la jurisprudència, o amb altres textos en vigor. A més es formulen propostes que se situen en l'àmbit de les dispenses singulars, les famoses amnisties o regularitzacions voluntàries, que generen greuges comparatius entre les persones que mai no han realitzat accions contra la normativa i no han



consolidat, per la via de fet, situacions que poden situar-se en el terreny dels drets adquirits.

També s'està experimentant una devaluació en la qualitat de les normes dictades, les múltiples mans que estan intervenint en els processos de conformació d'aquestes lleis tenen com a efecte que l'estructura final se'n vegi afectada, que el llenguatge utilitzat no sigui prou precís i inequívoc, i que l'ordre de les previsions no segueixi pautes clares. La tècnica legislativa que il·luminà temps de normes d'indiscutible qualitat, està quedant marginada per una intencionalitat efímera, pel curt termini, i per les circumstàncies canviants.

Serveixi aquesta introducció per justificar algunes de les valoracions realitzades a les cròniques anteriors, com també algunes de les que, probablement, s'apunten en aquest número de la revista. Passem ara a examinar amb més amplitud els temes que hem seleccionat aquest semestre.

## **2. Activitat legislativa**

### *2.1. S'aprova la Llei de pesca marítima, marisqueig i aquicultura.*

Una de les novetats legislatives relacionades amb l'extracció i aprofitament de recursos naturals és la nova llei de pesca marítima: la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aquicultura a les Illes Balears<sup>5</sup>. Aquesta disposició va ser aprovada pel Ple del Parlament el passat dimarts dia 22 d'octubre de 2013, en superar el text el dictamen de la Comissió d'Economia amb els vots a favor dels parlamentaris del Grup Popular, tot i que en alguns pocs apartats, també va comptar amb el vot dels grups a l'oposició i dels diputats no adscrits. Amb tot, les esmenes que no varen ser acceptades el seu dia davant la comissió, també van ser rebutjades al Ple.

El projecte de llei va ser impulsat per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori amb l'objectiu de regular, per primer cop a la història de l'arxipèlag, una activitat oblidada per la legislació balear. Amb la Llei 6/2013 es trenca amb la dinàmica d'un règim dispers, que es trobava cobert per una normativa reglamentària fragmentada i a vegades escassa. Aquesta llei de pesca neix amb la voluntat expressada pel legislador de disposar per primera vegada d'un marc normatiu propi que reguli l'activitat pesquera

---

<sup>5</sup> Accés a

<<http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=845276&lang=ca>>.

en tots els àmbits. A la discussió parlamentària es va proclamar en diferents ocasions el fet que aquesta norma s'hagi impulsat buscant el consens amb el sector afectat.

Des del punt de vista formal, la Llei ara aprovada, s'estructura en dotze títols, cent quaranta-sis articles, quatre disposicions addicionals, una de transitòria, una de derogatòria i tres de finals.

Segons podem llegir a l'exposició de motius, aquesta Llei 6/2013 ha de permetre adequar la normativa europea a les particularitats de la nostra comunitat autònoma amb mesures modernes de conservació i de gestió dels recursos marins vius, com ara els plans de gestió pluriennals, els plans de recuperació per a espècies concretes, els plans experimentals, els censos de vaixells o les quotes de pesca, entre d'altres. Aquesta és una de les dimensions ambientals que més podrien destacar de la nova normativa.

Igualment, també seria important destacar el fet que la llei (almenys sobre el paper), vol reforçar la figura de la reserva marina, eina fonamental de la política pesquera balear, amb la creació de la Xarxa Balear d'Àrees Marines Protegides, que vetllarà per la coordinació i la creació de sinergies entre els agents implicats. Així, la nova norma estableix que integren la Xarxa Balear d'Àrees Marines Protegides:

“1. Com a mínim, les reserves marines següents:

- Del Nord de Menorca.
- Dels Freus d'Eivissa i Formentera.
- De la Badia de Palma.
- De Migjorn de Mallorca.
- De les Illes Malgrats.
- De l'Illa del Toro.
- Del Llevant de Mallorca.

2. Com a mínim, els àmbits marins dels espais naturals protegits següents:

- Parc Nacional Maritimoterrestre de Cabrera.
- Les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.
- El parc natural de s'Albufera des Grau.
- El parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera”.

Un dels vessants que cal destacar des del punt de vista ambiental és que la nova llei permetrà regular la pesca marítima recreativa, una activitat per a la qual hi ha més de 50.000 llicències en vigor a la nostra comunitat, i que té una clara incidència sobre el recurs. Com a contrapunt, apareix a la norma la regulació d'una activitat complementària que, si ens atenem a l'experiència assolida amb els agroturismes, pot esdevenir principal. Ens referim a la previsió de que els pescadors podran complementar l'extracció amb altres activitats econòmiques relacionades, en particular, amb el turisme pesquer, una reivindicació històrica del sector que desconeixem cap a on pot derivar en un futur.

El que també pot destacar-se és el detallat règim sancionador que introdueix la llei. Aquest règim s'estableix tant per a la pesca professional, com per a la recreativa en aigües interiors, el marisqueig i l'aqüicultura, adaptat a la realitat social i pesquera de les Illes Balears.

## *2.2. Projecte de llei reguladora de l'ordenació i ús del sòl.*

Més controvertit i polèmic serà, amb tota probabilitat, el projecte de llei reguladora de l'ordenació i ús del sòl (LOUS)<sup>6</sup>, aprovat pel Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de data 13 de setembre de 2013, i que és enviat al Parlament de les Illes Balears per a la seva tramitació.

Aquest projecte de llei s'aprova després d'impulsar-se una bateria de decrets llei i de lleis en matèria d'ordenació territorial, urbanística i turística, amb clara incidència en la intervenció administrativa sobre el territori. Precisament, el mes de juny, el Govern donà als ajuntaments fins a l'any 2016, per regularitzar els serveis de clavegueram de zones residencials que no en disposaven, una de les assignatures pendents a molts indrets de l'arxipèlag. Així doncs, el Govern va aprovar un Decret llei de regulació provisional de les noves edificacions en nuclis residencials sense xarxa de sanejament amb l'objectiu de possibilitar, durant un període de tres anys, la construcció d'habitatges sense sanejament als nuclis, sempre que es tracti d'edificis unifamiliars, aïllats o entre mitgeres, i que es garanteixi un tractament correcte de les aigües residuals. Com a novetat, aquest decret llei fixa l'obligació del promotor de garantir el

---

<sup>6</sup> Accés a <<http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=1605811>>.

cost de les obres necessàries per a la futura connexió de l'edifici a la xarxa, quan aquesta estigui en funcionament.

Aquest decret llei deroga l'article 3 de la recent Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i d'impuls a la inversió, en què es fixà una normativa transitòria que exceptuava en determinats supòsits de sòl urbà i urbanitzable la necessitat d'implantació del servei de clavegueram, per a l'atorgament de llicències, certificats de finals d'obra i cèdules d'habilitat per a habitatges unifamiliars aïllats. Alhora, l'article esmentat exigia que en el termini d'un any, comptador des de l'entrada en vigor de la Llei, els ajuntaments havien d'haver aprovat definitivament el pertinent projecte d'urbanització o dotació de serveis que implantés el sistema de clavegueram, incloent-hi les connexions als sistemes generals de depuració i, així mateix, les obres esmentades s'havien d'executar i estar en funcionament abans de dos anys des de l'entrada en vigor de la Llei.

El problema és que el primer termini d'un any esmentat, va exhaurir el dia 5 d'agost de 2011 i el Govern ja va aprovar, en juliol de 2011, prorrogar dos anys, fins agost de 2013, els terminis recollits en l'esmentada Llei. La situació, ara com ara, és que la majoria d'ajuntaments afectats de les Illes Balears no havien aprovat definitivament els projectes d'urbanització o dotació de serveis de clavegueram al·ludits, i això impossibilitava, a partir de l'agost, la construcció de nous habitatges unifamiliars. Si això es produïa, s'hauria agreujat la difícil situació econòmica tant del sector públic com privat. Per això, és necessari mantenir aquesta regulació provisional fins a l'efectiva implantació del sanejament a tots els nuclis urbans, sense perjudici de les excepcions que legalment es puguin preveure; com no pot ser d'una altra manera, amb aquesta moratòria la protecció ambiental queda així marginada a favor de l'interès econòmic. Aquest desfasament va provocar que s'hagués d'aprovar el Decret llei 4/2013, de 21 de juny, de regulació provisional de les noves edificacions residencials sense xarxa de sanejament. Amb l'aprovació d'aquest decret llei, es dona un nou marge als ajuntaments fins a 2016 per regularitzar els serveis de clavegueram de zones residencials permetent, en determinats supòsits, exceptuar l'obligació d'implantar el servei de sanejament per atorgar llicències, certificats de final d'obra i cèdules d'habitabilitat per a habitatges unifamiliars, preveient un control previ de l'Administració competent en matèria hídrica; evidentment això cal fer-ho així per

evitar vulnerar la normativa europea sobre la matèria: Directiva marc d'aigua i altres disposicions en matèria de tractament d'aigües residuals, tot i que no se salva correctament la problemàtica que es genera en les anomenades zones sensibles.

Si apunto aquestes circumstàncies, és per a il·lustrar la tendència que marcarà la nova LOUS. L'avantprojecte ja va ser examinat en números anteriors de la RCDA, i per això no m'hi estendré ara, però podem analitzar el que preveu el projecte de llei amb relació al Decret llei 4/2013, sobre sanejament:

“Disposició addicional vuitena.

Exempció de la implantació de la xarxa de sanejament

1. Sense perjudici de l'establert a aquesta Llei per als assentaments en el medi rural, excepcionalment el planejament urbanístic general podrà preveure àmbits de sòl urbà a on no resulti exigible l'existència de xarxa de sanejament, sempre que es compleixin alguns dels requisits següents:

- a) Que l'execució de la xarxa de sanejament suposi, per les característiques geomorfològiques de la zona o per la baixa intensitat del nucli, un cost manifestament elevat.
- b) Que la seva implantació no suposi cap avantatge per al medi ambient.

En aquests casos, el planejament haurà de preveure la instal·lació de sistemes de depuració d'aigües residuals com depuradores d'aigua o fosses sèptiques estanques i homologades”.

La conclusió que podem extreure és que els successius decrets lleis i les lleis ja aprovades són pròrrogues que poden culminar amb l'acolliment que propicia aquesta disposició, és a dir, amb l'exoneració generalitzada en determinats casos de l'obligació de connectar-se a una xarxa de sanejament. En moltes ocasions això implicarà que d'un incompliment es farà virtut, amb l'estalvi consegüent pels residents i ajuntaments que no varen voler o poder, implantar una xarxa com manava la normativa d'aplicació. La disposició transitòria quarta completa la solució pretesa amb aquest règim (reproducció de l'aprovada amb el Decret llei 4/2013).

“Disposició transitòria quarta

Implementació de la xarxa de sanejament

En els sòls urbans d'ús predominantment residencial existents en la data que aquesta Llei entri en vigor i que no disposin de xarxa de sanejament i per als que no resulti procedent la categoria d'assentament en el medi rural ni l'aplicació del previst a la disposició addicional vuitena, es poden atorgar llicències d'edificació de nova planta per a ús residencial, així com els corresponents finals d'obra i cèdules d'habitabilitat d'acord a la normativa aplicable, sempre que concorrin els requisits següents:

- a) Que no siguin edificis plurifamiliars.
- b) Que disposin d'un sistema de recollida d'aigües residuals homologat que en garanteixi un tractament adequat.
- c) Que els promotors garanteixin, de qualsevol forma admesa en dret, l'execució de les obres per a la connexió a la xarxa de sanejament, una vegada que aquesta estigui efectivament implantada i en funcionament.
- d) Que la llicència s'atorgui dins els tres anys comptadors des de l'entrada en vigor del Decret llei 4/2013, de 21 de juny, de regulació provisional de les noves edificacions en nuclis residencials sense xarxa de sanejament.

El compliment del requisit que preveu la lletra b s'ha d'acreditar amb un informe de l'Administració competent en recursos hídrics, que té el caràcter de determinant, el qual s'ha d'emetre dins el termini de dos mesos des que se sol·liciti i abans que s'atorgui la llicència”.

Igualment, crec important fer un esment específic a la previsió que més controvèrsia ha generat: l'anomenada amnistia urbanística en sòl rústic, que va en la mateixa línia que la disposició apuntada anteriorment. La disposició és llarga, però crec important transcriure-la íntegrament per així poder una valoració inicial:

“Disposició transitòria desena

Procediment extraordinari d'incorporació a l'ordenació d'edificacions existents en sòl rústic.

1. Les edificacions existents en sòl rústic respecte de les quals a l'entrada en vigor d'aquesta llei ja no procedís adoptar les mesures de restabliment de la legalitat urbanística, per manifesta prescripció de la infracció segons la normativa d'aplicació, es podran incorporar a l'ordenació en el termini màxim de tres anys, amb tots els drets i deures inherents a les obres realitzades amb llicència.

Per a l'aplicació de l'anterior en sòls inclosos dins l'àmbit de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears s'entendrà que ha prescrit la infracció si s'acredita l'existència de l'edificació amb anterioritat al dia 10 de març de 1991, sempre que no s'hi hagi efectuat amb posterioritat un canvi d'ús.

A aquests efectes, el procediment se substanciarà per la persona interessada davant l'ajuntament corresponent, on se sol·licitarà la legalització juntament amb la documentació gràfica i escrita relativa a l'edificació en el seu estat real i projecte d'incorporació de mesures d'adequació a les condicions generals d'integració ambiental i paisatgística que l'ordenació estableixi. L'article 25.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears no resultarà aplicable als efectes d'aquest procediment.

2. L'anterior incorporació no resultarà d'aplicació a les edificacions que, d'acord amb el planejament vigent, quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta o enderrocament o quan en les edificacions es desenvolupin activitats subjectes a la prèvia declaració d'interès general.

Així mateix, no resultarà d'aplicació a aquelles edificacions existents situades en domini públic i en les servituds derivades de la legislació de costes.

3. La legalització restarà subjecta al pagament de les mateixes taxes i dels mateixos impostos prevists a la normativa per a les noves edificacions. Així mateix, la persona interessada haurà d'abonar a l'ajuntament una prestació econòmica. Les quantitats ingressades per aquest concepte s'han de destinar a l'adquisició, recuperació, protecció i gestió sostenible d'espais i recursos naturals o la seva incorporació al patrimoni municipal de sòl.

La prestació econòmica a que es refereix el paràgraf anterior es fixarà per aplicació dels següents percentatges al cost d'execució material de l'edificació legalitzada que es fixi a l'expedient de legalització:

- a) El 15%, si la legalització es realitza en el primer any de la vigència d'aquest procediment.
- b) El 20%, si es realitza en el segon any.
- c) El 25%, si es realitza en el tercer any.

4. Aquesta disposició entrarà en vigor una vegada que, en l'àmbit insular respectiu, s'hagi adoptat acord plenari del consell insular per majoria absoluta. Aquest acord plenari es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el termini de tres

anys a què es refereix l'apartat primer de la present disposició es començarà a comptar a partir de la dita publicació”.

Efectivament, les edificacions en sòl rústic il·legals, que no hagin estat sancionades per la infracció comesa i aquesta hagi prescrit, podran gaudir de la condició d'edificació legalitzada. Si es té present que el 90 per cent de les edificacions il·legals a les Illes no han estat mai objecte d'un expedient de disciplina urbanística, estem davant una dispensa singular (o una legalització encoberta) que defrauda els principis d'igualtat i de seguretat jurídica, així com el de confiança legítima, en perjudici del ciutadà complidor amb la llei.

Molts observadors han apuntat la possible inconstitucionalitat d'aquesta previsió, i a més s'espera que es plantegi més d'un conflicte davant dels tribunals. El resultat és que pagant una determinada suma de diners, l'infractor pugui rescabalar el dany comès amb la infracció sense que calgui restituir ni la realitat jurídica infringida ni la realitat física alterada. Amb tot, el mecanisme és confús i està supeditat a una sèrie de condicions complexes, en especial l'explicitada a l'apartat quart.

Caldrà esperar ara a l'evolució del projecte en seu parlamentària, i és presumible que en una pròxima crònica puguem comentar ja el text definitiu de la Llei.

### *2.3. Nou pla hidrològic.*

En cròniques anteriors havíem explicat les vicissituds del Pla Hidrològic de les Illes Balears que, un cop aprovat pel Govern, tramés a Madrid i informat favorablement per la Mesa Nacional de l'Aigua, va ser retirat el 2011 pel nou Govern entrant. Amb el retorn del Pla elaborat el seu dia, aquest va ser desconstruït, amb les mancances i buits consegüents. El pla, però, es va anant corregint i revisant, fins a arribar a un text que el 15 de juliol es va sotmetre a aprovació del Consell Balear de l'Aigua. Cal recordar que aquest nou document està cridat a substituir l'actual Pla, vigent des del 2001.

El Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB), és el document que ha de regir la preservació i l'aprofitament del domini públic hidràulic de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els anys vinents. La proposta sotmesa a aprovació va ser ratificada per àmplia majoria, atès que consten en acta 33 vots a favor i un en contra. Cal observar que el Consell Balear de l'Aigua està presidit pel conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, i està constituït per representants de les Conselleries d'Agricultura, Medi



Ambient i Territori, d'Hisenda i Pressupostos, d'Economia i Competitivitat, de Salut, de tots els Consells Insulars, la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), ajuntaments, organitzacions agràries, pesqueres i ramaderes, associacions de consumidors, entitats ecologistes, així com altres col·lectius professionals vinculats amb la gestió de l'aigua i les infraestructures hídriques de la nostra comunitat autònoma com el Col·legi Oficial d'Enginyers de Camins, el Col·legi Oficial d'Enginyers de Mines o l'Associació d'Empreses de Sondejors. La unanimitat no deixa de ser sorprenent en un document d'aquestes característiques.

Amb posterioritat, el Govern va ratificar el 19 de juliol de 2013, el text del nou Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB). Unes setmanes després, el Consell Nacional de l'Aigua, en data 6 d'agost de 2013, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), va informar favorablement del nou Pla Hidrològic. El resultat de la votació va ser: 77 vots a favor, 4 en contra i 3 abstencions. Aquest òrgan assessor del Govern central compta amb representació de l'Administració General de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, dels agents locals, dels organismes de conca, de les organitzacions professionals i econòmiques relacionades amb els diferents usos de l'aigua, de les organitzacions sindicals i empresarials i de les entitats sense afany de lucre estatals.

Un cop ratificat pel Consell Nacional de l'Aigua, el Pla Hidrològic de les Illes Balears va ser tramès al Ministeri per a la redacció de la proposta corresponent d'aprovació. Així, finalment, el Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), va aprovar el dia 6 de setembre de 2013, el Reial decret 684/2013, pel qual s'aprova el pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears<sup>7</sup>. El Reial decret va ser publicat al BOE número 215, de 7 de setembre de 2013 (pàgines 65340 a 65342), per la qual cosa ha entrat en vigor, tot i que no s'ha publicat encara la normativa del Pla al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Com veurem, el PHIB ha de regir, en principi, la preservació i l'aprofitament del domini públic hidràulic de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els anys vinents. Tal com es fa constar en la motivació del Pla, els principals objectius que hi conté són: garantir el bon estat ecològic del domini públic hidràulic; satisfer la demanda d'aigua, protegint-ne la qualitat; equilibrar i harmonitzar el desenvolupament regional i sectorial;

---

<sup>7</sup> Accés a <http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/07/pdfs/BOE-A-2013-9429.pdf>

i fomentar un ús racional d'aquest recurs preuat i ben escàs en el context insular de conques aïllades i limitades.

L'adaptació a la Directiva Marc de l'Aigua fa que el nou PHIB introdueixi la figura de massa d'aigua en substitució del concepte unitat hidrogeològica utilitzat fins ara per classificar els recursos disponibles, i classifica aquestes masses en quatre categories en funció del seu estat ecològic. En concret, es classifiquen 90 masses d'aigua a les Illes Balears, de les quals el 70 % es troben en un bon estat. Els principals objectius del nou pla són garantir el bon estat ecològic del domini públic hidràulic, satisfer la demanda d'aigua, protegint-ne la qualitat, equilibrar i harmonitzar el desenvolupament regional i sectorial i fomentar un ús racional d'aquest recurs. La memòria del pla destaca el fet que "es tracta d'un pla realista i més conservador que el document vigent fins ara, que cerca l'equilibri entre la protecció del recurs i la satisfacció de la demanda"; allò que resta per comprovar, és si amb aquest nou pla es protegirà millor el recurs,

Entre els aspectes més destacats del nou PHIB, cal destacar també tot un seguit de mesures encaminades a garantir l'estat ecològic de l'aigua, com ara la reducció de l'extracció d'aigua de pou permesa per a consum domèstic, passant de 500 a 400 m<sup>3</sup>/any, o la prohibició de fer extraccions en els primers 200 metres de la costa per evitar la salinització dels aqüífers. També s'atorga la màxima protecció possible que recull la Llei d'Aigües a les 4.215,15 hectàrees qualificades actualment com a zones humides de les Illes Balears, i es recull la possibilitat de recuperar futures zones, així com la possibilitat de recuperar zones humides degradades i integrar-les dins d'un projecte urbà.

A més, el PHIB manté els perímetres de protecció dels pous de subministrament urbà, així com la distància mínima entre captacions, que és de 100 metres, tal com indica la Llei d'Aigües. També fomenta l'ús de recursos alternatius (aigua regenerada i dessalada) per a determinats usos amb l'objectiu d'afavorir la recuperació i la millora dels recursos naturals.

El PHIB també recull mesures encaminades a l'ús racional i a l'estalvi d'aigua, amb un objectiu de reducció de pèrdues en xarxa del 20 % abans de l'any 2021, impulsant que les noves edificacions incloguin aixetes d'estalvi d'aigua.

El procés de redacció del Pla Hidrològic ara aprovat, i que substitueix el retirat el seu dia, va començar el novembre de l'any 2011, en el marc d'un procés participatiu que,

segons afirma el Govern, ha cercat el màxim consens possible amb tots els agents implicats. Al llarg dels darrers mesos, el document es va sotmetre a dos terminis d'exposició pública i a l'avaluació ambiental per part de la Comissió Balear de Medi Ambient, pel tràmit d'urgència.

#### *2.4. Avantprojecte de la futura Llei de transports i mobilitat.*

Un altre projecte que avança en la tramitació, una vegada elaborat el text inicial, és el relatiu a la futura Llei de transports i mobilitat. Precisament en data recent, el dia 14 de novembre de 2013, el Consell Balear de Transports Terrestres de les Illes Balears va informar favorablement l'avantprojecte de llei. Aquest òrgan col·legiat està constituït per tots els agents implicats en el sector del transport a les Illes Balears; en són membres diferents representants de la Direcció General de Transports del Govern de les Illes Balears, els consells insulars, la Cambra de Comerç, el Consorci de Transports de Mallorca, les associacions de consumidors i usuaris, els sindicats més representatius, la Federació d'Entitats Locals (FELIB), l'Ajuntament de Palma i les federacions o associacions d'àmbit autonòmic més representatives dels sectors del transport terrestre de mercaderies, regular de viatgers i discrecional de viatgers en autobús, del transport públic de viatgers en automòbils de turisme i sanitari de carretera, d'operadors de transport terrestre, de les agències de viatges, i del lloguer de vehicles, com també de les empreses de transport ferroviari, la Confederació de PIME-Balears (PIMEB) o la gran patronal CAEB.

Durant el procés d'elaboració de l'esborrany de la llei, s'ha procedit a obrir els debats corresponents, a més de sotmetre-ho a dues fases d'exposició pública, perquè el sector pogués opinar i fer les seves aportacions. Segons el calendari que té previst el Govern, la intenció és sotmetre el text a aprovació del Consell de Govern, amb la finalitat de tramitar-se davant del Parlament abans d'acabar l'any 2013.

La memòria que acompanya el text d'avantprojecte destaca la importància de comptar en un futur pròxim amb la primera llei de transports de les Illes Balears; igualment assenyala que fa dos anys que es treballa en el document i que s'ha buscat en tot cas el màxim consens. Igualment s'assenyalen els objectius de combatre decididament l'oferta il·legal que perjudica el sector, de flexibilitzar determinades fórmules i tràmits administratius, i de facilitar nous models (es parla de l'autorització de taxis de més de

cinc places com una de les novetats que recollirà la norma), entre moltes altres novetats que analitzarem en un pròxim número de la RCDA, un cop s'hagi aprovat el text definitiu.

### **3. Política sobre patrimoni ambiental.**

#### *3.1. Projecte de conservació i millora del Parc natural de s'Albufera des Grau.*

En moltes ocasions hem comentat els aspectes positius de la cooperació entre els instruments d'intervenció administrativa i la iniciativa privada, amb la finalitat de contribuir a la conservació del patrimoni natural. Un dels instruments que més hem tractat és el de l'anomenada custòdia del territori<sup>8</sup>. La custòdia del territori (*Land Stewardship*), és un fenomen social de conservació privada del patrimoni natural i cultural sorgit al segle XIX als Estats Units d'Amèrica, la projecció del qual al món anglosaxó ha estat enorme. La necessitat d'ampliar quantitativament i qualitativament l'horitzó de conservació del patrimoni natural al nostre país, requereix abordar seriosament la implicació activa de la societat i de la propietat privada en aquest objectiu que, tradicionalment, s'ha configurat com una mera funció pública ambiental.

Com a variant del concepte estricte de custòdia privada podem trobar figures de cooperació entre el sector privat i el sector públic per completar els objectius d'aquesta funció pública de conservació a què fem esment. Amb tot, la legislació espanyola en matèria de patrocini o mecenatge no aporta un escenari atractiu per a la cooperació entre ambdós sectors. En un apartat ulterior parlaré d'una iniciativa singular arran de l'incendi que va cremar 2.335 d'hectàrees a la serra de Tramuntana de Mallorca, però ara interessa destacar un apartat que, afortunadament, es repeteix any rere any i a molts altres indrets sotmesos a protecció.

En el cas que ens ocupa ara, el Govern de les Illes Balears i l'Obra Social "la Caixa" van presentar aquest novembre el projecte de conservació i millora del Parc natural de s'Albufera des Grau (Menorca), que implica la realització d'una sèrie de feines de millora i conservació, executades per una brigada de persones en risc d'exclusió sociolaboral en l'esmentat parc. Aquestes feines formen part del projecte de conservació

---

<sup>8</sup> Gómez González, J. M.: «La Custodia del Territorio como instrumento de implicación social en la conservación del patrimonio natural». Revista Ecosostenible, n.º 16, Junio de 2006. Wolters Kluwer; Gómez González, J. M.: REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL, Vol. II Núm. 2 (2011): 1-29: <http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/viewFile/220/786>

d'aquest espai natural protegit, que han impulsat conjuntament el Govern de les Illes Balears i l'Obra Social de l'entitat esmentada, amb l'objectiu de millorar alguns indrets d'ús públic del parc i afavorir a la vegada la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió. El projecte implica una aportació de 31.400 euros de l'entitat financera, un exemple de cooperació o de mecenatge privat amb finalitats ambientals.

Les tasques a realitzar es concreten en la realització de diferents actuacions al parc, durant tres mesos, des de mitjan setembre i fins a mitjan desembre de 2013. D'aquestes feines se n'ocupen una brigada de quatre treballadors i un capatàs de la Fundació Nous Vents.

D'acord amb el que s'informà amb relació al projecte, en primer lloc, els treballadors fan tasques de neteja i retirada de la vegetació excedent dels vorals dels tres itineraris d'ús públic del parc, que són el de sa Gola, el de Santa Madrona i el del Mirador de cala Llimpa, que representen una extensió total de 6,2 quilòmetres; i en segon lloc, i de manera simultània, es retiren els residus que la mar arrossega fins al litoral de s'Albufera. Fins avui ja s'ha actuat a cala Avellana i cala Torreta.

Finalment, a partir de mitjan novembre, les feines de millora del parc es completaran amb la retirada de la flora al·lòctona dels voltants del far de Favàritx, on per primera vegada es durà a terme una actuació d'aquestes característiques. Concretament, durant el darrer mes de projecte les tasques de la brigada se centraran a extreure i eliminar els exemplars d'espècies invasores com la pita o l'aloè, que es troben en aquesta banda del parc i que són una amenaça per a la biodiversitat de la zona i per a les espècies vegetals autòctones que hi habiten.

La funció social i els objectius de conservació ambiental conflueixen sovint. Els espais naturals ofereixen entorns i ambients propicis per a la implantació de programes d'inserció laboral, i la feina amb col·lectius en risc d'exclusió. Aquesta cooperació pública i privada amb finalitats ambientals, s'hauria de poder potenciar encara més amb la revisió del marc normatiu de fundacions i mecenatge.

### *3.2. Ampliació de zones marines protegides.*

En la línia del que hem apuntat en l'apartat dedicat a l'aprovació de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, es treballa en l'ampliació de zones marines, tot i que aquest objectiu pretén cercar l'equilibri

"econòmic, social i mediambiental", amb una clara exemplificació del concepte de triple sostenibilitat, que tant agrada als actuals gestors ambientals de l'arxipèlag. Es vol plantejar una possible protecció de noves àrees marines en el mar balear, però posant per davant l'afectació sobre el sector pesquer insular que aquestes mesures podrien implicar.

Ha transcendit un document en el qual es planteja la creació de tres noves àrees marines protegides al sud de Mallorca (muntanyes Emile Baudot, Ausiàs March i Llevant de Cabrera). Aquest document és en realitat un esborrany d'ordre ministerial que ha elaborat el Ministeri d'Agricultura, Alimentació, i Medi Ambient. El document inclou també la protecció del canal de Menorca i una sèrie de mesures adreçades a esmorteir els efectes de la pesca d'arrossegament.

Arran l'aprovació el 22 d'octubre de 2013, de la primera Llei de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, la política del Govern s'adreça a cercar l'equilibri entre els interessos del sector i la protecció dels recursos pesquers. Les polítiques que se'n deriven tenen com a objectiu que els pescadors representin un paper destacat "en la gestió sostenible de la pesca" i que es fan els passos necessaris per aconseguir acords positius per al sector.

### *3.3. Geoparc a Menorca*

Com també havien exposat en números anteriors de la RCDA, Menorca està impulsant la declaració de l'illa com a geoparc per part d'UNESCO. Recentment, aquesta candidatura ha rebut un nou impuls amb el suport del Senat. Així, la comissió de Medi ambient i Canvi Climàtic del Senat va mostrar per unanimitat un "total i decidit" suport a la candidatura que impulsa el Consell Insular de Menorca.

Un geoparc reconegut per la UNESCO és un territori que compta amb un patrimoni geològic excepcional pel seu valor científic didàctic i estètic. Segons el programa de la institució internacional, un geoparc ha de ser un territori que disposi d'una estructura de gestió sòlida i que garanteix la participació ciutadana. La figura conflueix amb la Reserva de la Biosfera que ha complert els primers vint anys a Menorca, i és que la figura del geoparc, aposta per una estratègia de desenvolupament socioeconòmic sostenible que inclou la promoció i la conservació dels valors naturals i culturals del territori.

Així, amb el desenvolupament del projecte geoparc, es pretén aprofitar el treball realitzat a Menorca com a reserva de la biosfera i estimular l'economia local, no només el turisme sostenible. La feina feta en aquest sentit incorpora ara el mètode de treball avalat per UNESCO i que la xarxa europea supervisa dues vegades a l'any en les reunions del comitè de coordinació. Com ja vàrem explicar el seu dia, la proposta de geoparc va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics del Consell Insular de Menorca en el Ple de 18 de març de 2013.

#### *3.4. Declaració de nous llocs d'importància comunitària (LIC).*

El Consell de Govern de dia 16 de juliol, va acordar ampliar la llista de llocs d'importància comunitària (LIC) de les Illes Balears amb l'espai protegit per la Xarxa Natura 2000 Puig Malet i Santa Eularieta (LIC ES5310126), amb una superfície de 35,5 hectàrees en els termes municipals des Mercadal i d'Alaior, a Menorca.

L'objectiu d'aquesta nova zona LIC és protegir diferents hàbitats d'interès comunitari com l'ullastrar menorquí (*Olea* i *Ceratonia*), els alzinars (*Quercus ilex* i *Quercus rotundifolia*) i els matolls termomediterranis i preestèpics que es troben en aquest indret del centre de l'illa. Dins l'àmbit territorial d'aquest LIC, s'hi troba la finca pública del Consell de Menorca Santa Eularieta, que forma part del que es coneix com a Plans d'Alaior o Plans de Turmadèn, al municipi des Mercadal, en la qual s'han reforestat 9,5 hectàrees d'ullastrar autòcton. La geomorfologia d'aquesta zona es caracteritza per unes terres majoritàriament planes formades per materials al·luvials derivats principalment dels substrats silícis que l'envolten, on també són presents nombrosos pujols de poca alçada que funcionen com a illes d'ambients més eixuts o dominats per substrats rocosos i com a refugis de biodiversitat enmig d'uniques terres amb una llarga tradició d'ús agropecuari.

La incorporació d'aquest LIC és una mesura compensatòria a l'ampliació de l'abocador des Milà II, al terme de Maó, que el Govern acordà l'any 2007. En virtut de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), l'ampliació de l'abocador, ubicat dins el LIC de s'Albufera a la Mola (ES 0000235), s'havia de compensar amb la recuperació i la protecció d'una superfície igual o superior a la que es destinava a l'ampliació de l'abocador, de 8,9 hectàrees, que pogués allotjar els hàbitats i les espècies que s'alterarien amb aquell projecte.

Amb aquesta declaració, les Illes Balears disposaran de 138 llocs d'importància comunitària, amb una superfície de 221.119,5 hectàrees terrestres i marines. Els LIC són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. La pàgina <<http://www.xarxanatura.es>> recull els LIC i les zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) de les Illes Balears. D'aquestes darreres, se n'han declarat 55 a l'arxipèlag balear, amb una superfície de 138.591 hectàrees.

### *3.5. Accions de recuperació de fauna autòctona*

Balears compta, mitjançant un altre mecanisme de concert entre l'administració pública i la iniciativa privada, amb el Consorci per a la Recuperació de Fauna de les Illes Balears (COFIB). El centre acull fauna recollida del medi natural amb la finalitat de recuperar-la i procedir posteriorment a l'alliberament quan el seu estat així ho permet. El COFIB atén una mitjana de 2.500 animals cada any, l'any passat la xifra d'animals recollits arreu de les Balears va ser de 2.797, entre animals silvestres (2.331) i exòtics (466). Les darreres accions d'alliberament, en el marc del programa anual d'activitats, s'han posat en pràctica al Parc natural de Mondragó (Mallorca), amb l'amollada d'uns trenta exemplars de fauna autòctona recuperats en les darreres setmanes a les instal·lacions del COFIB.

L'objectiu d'aquestes activitats és sensibilitzar sobre la importància de la conservació d'espècies autòctones del Parc i alliberar al seu hàbitat originari els exemplars que, per diferents raons, han estat recuperades en els darrers mesos, i que han romàs al COFIB fins que han assolit el pes i mida adient perquè puguin sobreviure en llibertat.

Segons informen des del Parc Natural de Mondragó, aquest espai du a terme des de l'any 1994 un programa de seguiment de la tortuga mediterrània, que inclou actuacions de conservació com la neteja, manteniment i supervisió de diferents abeuradors distribuïts pel Parc i l'alliberament d'exemplars per incrementar-ne la població. En els darrers dinou anys, s'han alliberat 737 exemplars d'aquesta espècie endèmica de la marina de Lluçmajor que habita predominantment en zones agrícoles amb bardisses i garrigues xèriques.

Entre els hàbitats de fauna que es troben al Parc Natural de Mondragó destaquen els de les diferents espècies d'aus que es concentren sobretot en els estanys del tram final dels



torrents de s'Amarador i ses Fonts de n'Alis, on, a més del xoriguer, hi habita el sebellí (*Burhinus oedicnemus*), el tudó (*Columba palumbus*), la tórtora (*Streptopelia turtur*), el puput (*Upupa epops*) i moltes d'altres de mida petita com el ferrerico (*Parus major*) i el busqueret (*Sylvia sp.*).

Entre els mamífers del Parc Natural de Mondragó destaca l'eriçó, que habita en zones de pinar i en garrigues així com en zones agrícoles, el mostel, la geneta i el mart, i alguns rosegadors com el conill, la llebre, el ratolí de rostoll o la rata cellarda.

Arreu de la marina del Parc també s'hi troba, a més de la tortuga mediterrània, la serp de garriga i el calàpet. El Parc Natural de Mondragó consta de 766 hectàrees considerades Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI), i forma part de la Xarxa Natura 2000 com a Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i Lloc d'Interès Comunitari (LIC).

Tota activitat d'alliberament de fauna recuperada persegueix un doble objectiu, d'una banda la reinserció en el medi natural d'exemplars ferits recollits pels tècnics i agents de l'autoritat en matèria de medi ambient; d'una altra banda, també es vol conscienciar la ciutadania de la importància de la conservació d'aquestes espècies, no només per assegurar el bon estat de les poblacions d'exemplars propis dels espais naturals protegits i que són, en essència, representants dels valors ambientals d'aquests indrets. És evident que amb aquestes accions es persegueix també garantir l'equilibri ecològic dels diferents hàbitats.

#### **4. Política davant el canvi climàtic.**

##### *4.1. Energies renovables a Menorca.*

En el marc de les polítiques que pretenen reforçar la condició de Menorca com a Reserva de la Biosfera, l'Agència Menorca Reserva de Biosfera promou una instal·lació fotovoltaica a la seu del Consell Insular a Maó. El que cal destacar de la iniciativa és que promou l'autoconsum davant la penalització que recentment s'ha imposat sobre la generació d'energia fotovoltaica connectada a la xarxa.

Així, s'ha publicat que el consell d'administració de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera en la seva darrera reunió va aprovar instal·lar un conjunt de plaques de generació d'energia fotovoltaica i quatre punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la seu

del Consell Insular de Menorca. De les característiques distintives de la instal·lació prevista es destaca per part del Consorci, que es tracta d'una planta fotovoltaica de 50 kW (58,86 kWp) que s'ubicarà sobre la coberta de la seu del Consell Insular i es connectarà a la xarxa elèctrica interior en règim d'autoconsum íntegre (evitant la injecció d'excedents a la xarxa externa). Es preveu l'habilitació de 4 punts destinats a la recàrrega de vehicles elèctrics, un sistema de monitorització i seguiment del funcionament de la instal·lació.

Aquesta iniciativa s'emmarca en una política d'impuls de l'activitat econòmica relacionada amb la protecció del medi ambient, en la que l'eficiència i l'estalvi energètic, les energies renovables i la mobilitat elèctrica són protagonistes especials, com es va posar de manifest en primer Congrés d'energies renovables i sostenibilitat en territoris insulars celebrat el passat mes d'abril, del que també ens vàrem fer ressò.

Amb aquesta iniciativa el Consell Insular i l'Agència de Reserva de Biosfera de Menorca volen demostrar que és possible avançar en la introducció de les energies renovables, per cobrir part de les nostres necessitats energètiques, sense esperar a una legislació o normativa favorable. El model proposat en fonamenta en la incorporació de tecnologies madures que fan tècnicament viable la generació d'energia elèctrica destinada a l'autoconsum. La instal·lació anunciada vol ser un exemple per a altres administracions, empreses o particulars.

#### *4.2. Reforestació i canvi climàtic*

Continuant amb les polítiques de cooperació entre la iniciativa privada i l'administració del Govern de les Illes Balears s'ha impulsat, un any més, la campanya "Planta'm, actua contra el canvi climàtic". La iniciativa consisteix en el repartiment de diferents arbres i plantes autòctones per a ser plantades al medi natural. Fonamentalment les espècies triades: són pins, alzines i ullastres.

La iniciativa consisteix en la instal·lació d'una carpa informativa en una quinzena de fires i mercats de Mallorca, Menorca i Eivissa on es reparteixen arbres per plantar per tal de donar a conèixer les espècies d'arbres autòctons de les Illes Balears i informar els visitants de la important funció dels boscos en la lluita contra la desertificació i el canvi climàtic.

Aquesta iniciativa té un doble objectiu: d'una part, vol sensibilitzar la ciutadania, especialment el públic familiar; d'una altra part, també pretén contribuir a afavorir la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social. En aquest cas, personal de l'organització Amadip-Esment ha participat en el disseny i impressió de les bosses de les plantes i dels fulls informatius i un equip de quatre persones en risc d'exclusió de la Xarxa Incorpora s'encarrega d'embossar i de repartir les plantes.

Aquest projecte forma part del Programa d'Espais Naturals i Reinserció Social de l'Obra Social "la Caixa" i es du a terme en el marc del conveni signat entre aquesta entitat financera i el Govern de les Illes Balears per a l'any 2013. Per a executar-lo, l'entitat financera hi ha destinat enguany 40.000 euros.

### **5. Cooperació pública i privada: recuperació ambiental d'àrees cremades.**

L'illa de Mallorca va viure un dels majors incendis forestals de la història recent. La zona de ponent de la serra de Tramuntana va veure com es cremaven 2.335 hectàrees durant gairebé una setmana (entre el 26 de juliol i el 3 d'agost de 2013). Malgrat el desplegament de mitjans, durant diversos dies no es va poder fer res per aturar l'avançament de les flames, en una zona que ja havia cremat anys enrere.

Com a reacció per esmorteir l'efecte de l'incendi i treballar en la recuperació de la zona, es va crear la comissió "Tot(s) per sa Serra" formada pel Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i els ajuntaments afectats per l'incendi forestal que es va iniciar divendres 26 de juliol al municipi d'Andratx per tal de canalitzar i agrupar totes les actuacions públiques o privades que es posin en marxa a partir d'ara per recuperar la zona cremada.

La intenció manifestada pel Govern, era la de coordinar així totes les iniciatives que tinguin per objectiu recuperar part de la serra de Tramuntana que s'ha cremat amb l'esmentat incendi. Amb aquest motiu, s'ha creat un espai web (<<http://totspersaserra.caib.es>>) on s'aniran incorporant les accions que es vagin duent a terme. La col·laboració de particulars també està oberta mitjançant accions de voluntariat i un compte on recollir les aportacions econòmiques en forma de donacions que es puguin produir.

L'acció de la comissió corre paral·lela a un pla d'actuacions per a la recuperació de la zona afectada. Aquest pla es centra, en primer lloc, en la retirada de restes cremades per

garantir la seguretat de les persones i els béns, i en les actuacions per evitar despreniments i prevenir l'erosió del sòl i la desertificació.

D'altra banda la Comissió Tot(s) per sa Serra va crear cinc grups de treball per coordinar les actuacions de recuperació de la zona afectada per l'incendi. L'objectiu dels grups de treball és integrar tots els professionals i col·lectius que hagin de participar activament en el procés de recuperació de la superfície afectada. Aquests grups de treball constituïts són: caça; associacions; propietaris afectats; restauració, i voluntariat.

Igualment un dels fronts que impulsa la comissió és la de desplegar accions de voluntariat que participaran en les successives jornades de recuperació de la zona afectada per l'incendi. Les tasques són bàsiques i no especialitzades, tot i que es treballa en zones de fortes pendents i elevat risc d'erosió, on s'hi han començat a construir petites preses i faixes vegetals que actuaran com a infraestructures de contenció del sòl. Es tracta de contenir els processos erosius que poden dificultar la futura recuperació vegetal de la zona. Igualment es tracta de reconstruir els marges de pedra en sec i parets afectades.

La Comissió constituïda planteja un exemple de reacció ràpida davant un esdeveniment greu que ha sensibilitzat de manera significativa la població de l'illa de Mallorca. Aprofitar aquest tipus d'esdeveniments desgraciats per a conscienciar socialment i promoure accions de cooperació públiques i privades amb la mobilització ciutadana, ha estat una maniobra de reflexos ràpids que cal valorar positivament. Un exemple de per on poden anar algunes polítiques ambientals que requereixen una ampla complicitat.